

Santiago, 13 de agosto de 1993

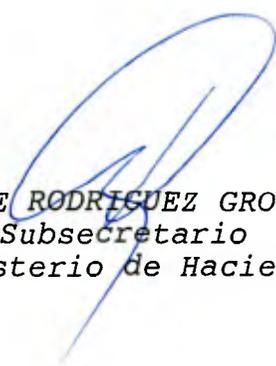
Su Excelencia
Don Patricio Aylwin Azócar
Presidente de la República
PRESENTE

De mi consideración:

Según lo conversado, adjunto tengo el agrado de enviarle un informe sobre la solicitud del Senador don Sergio Onofre Jarpa, relativa a la condonación de la deudas CORA.

Del referido informe se desprende la posibilidad de solucionar el problema actual de los deudores CORA sobre la base de una iniciativa legal acualmente en trámite en el Congreso. Este proyecto de ley permitiría realizar convenios de pago entre los afectados y la Tesorería General de la República, atendiendo a las características y situación de los afectados.

Sin otro particular, saluda atentamente a Us.



JORGE RODRIGUEZ GROSSI
Subsecretario
Ministerio de Hacienda

INFORME DEUDAS CORA

Con fecha 30 de abril del año en curso, cesó la aplicación de la Ley Nº 19.118 y su modificación contenida en la Ley Nº 19.157, última que implicó un mejoramiento de los beneficios otorgados por la primera, aparte de ampliar los plazos para hacerlos efectivos.

Las leyes citadas significaron que un grupo importante de parceleros (personas naturales, dueños exclusivamente de un predio ex-Cora adquirido directamente del asignatario original) ingresaran a la categoría denominada "Asimilados" y que, básicamente, disfrutaran en forma permanente del descuento del 70% de cada cuota reajustada y sin intereses, beneficio que era privativo de los asignatarios originales.

Los demás deudores ex-Cora tuvieron una condonación de todos los intereses penales que afectaban a las cuotas morosas a julio de 1991 y, adicionalmente, la posibilidad de pagar toda la deuda, vencida (excluidos los intereses penales) y futura, con un 40% de descuento con tal de que fuera pagada al contado y dentro del plazo que venció en la fecha antes citada.

A este respecto, cabe señalar que, de un universo de 14.000 personas susceptibles de acogerse a la rebaja indicada, presentaron solicitud alrededor de 4.000 y, efectivamente, pagaron 3.100 de ellos.

Por otra parte, es necesario consignar que las leyes señaladas no han sido las únicas dictadas con el objeto de mejorar la situación de los deudores ex-Cora.

Al efecto cabe señalar el D.L. 2.402/78 en lo que se refiere a unificar los sistemas de reajustabilidad; el D.L. 3.262/80 que autorizó la libre venta de predios sujeto a la condición de que el adquirente asuma el pago de la deuda pendiente, permitiendo que los compradores que reunieran características iguales o similares a los asignatarios, conservaran las condiciones de pago de éstos; el D.L. 3.516/80, que con el objeto de dar más fluidez al mercado de tierras, autorizó la subdivisión de los predios y la consiguiente división de la deuda; la Ley Nº 18.196, que amplió en dos años el plazo de pago de todas las deudas ex-Cora, previa consolidación de ellas, condonando los saldos de precio de los predios vendidos por la ex Caja de Colonización Agrícola no afectos a reajuste; la Ley Nº 18.377, que consagró el 70% de descuento de la deuda de los asignatarios originales, aumentó plazo de pago y rebajó las tasas de interés a los segundos adquirentes, condonó intereses penales y amplió en siete años el plazo de los adquirentes de reservas ex-Cora, disponiendo una nueva consolidación de las deudas; la Ley Nº 18.482, que permitió a los adquirentes que no se acogieron al trato especial del artículo 5º del D.L. 3.262/80, lo hicieran en forma extraordinaria; la Ley Nº 18.658, que fijó definitivamente el monto de las deudas a los valores determinados por Tesorerías al 30.04.85 (Ley Nº 18.377), evitando un interminable recálculo de ellas, y otorgando la posibilidad de sanear títulos eventualmente nulos por incumplimiento de las normas del D.L. 3.262/80; la Ley Nº 18.722, que concedió una rebaja del 40% a los segundos adquirentes sin distinción, por un sólo predio, y finalmente, las comentadas leyes Nº 19.118 y Nº 19.157.

Como es posible apreciar, casi con un promedio de dos años, se ha dictado a lo menos una ley que consagra algún tipo de beneficio, sean rebajas, condonaciones, aumentos de plazos, saneamientos de títulos, etc., siendo tal vez el único sector de la economía que mantiene deudas fiscales, que ha sido tan abundantemente favorecido por sucesivos textos legales.

Lo anterior, ha implicado que la presencia cobradora del Servicio de Tesorerías sea, en la práctica nula, puesto que desde la formulación del respectivo proyecto, discusión, análisis, aprobación y aplicación, implica un transcurso de tiempo cercano a los dos años, de tal manera que la labor de cobranza queda limitada a notificar la morosidad para evitar la prescripción de las acciones de cobro, impidiéndose una recuperación efectiva de lo adeudado.

Ahora bien, en nuestra opinión, no sería conveniente propiciar un proyecto de ley como el propuesto por el Senador Jarpa, pues atenta directamente contra la formación de una cabal concidencia tributaria; favorecería plenamente a un sector que ya ha recibido de parte del Estado, y durante los últimos 10 años, innegables beneficios, creando una situación discriminatoria en contra de los deudores que, con esfuerzo han pagado la totalidad de sus obligaciones o las mantienen al día.

Por lo expresado, resultaría una solución equitativa otorgar al Tesorero General de la República la facultad permanente de otorgar convenios de pago a los deudores morosos. Esta facultad, que es de habitual aplicación en el caso de los impuestos en mora, no existe respecto de los créditos fiscales de origen no tributario, como ocurre con las deudas ex-Cora.

Conforme a lo anterior, se encuentra pendiente en el Parlamento un proyecto de ley (Mensaje Nº 196/325 de 20.04.93) en cuyo artículo 8º se consagra la mencionada facultad que **permitirá al Servicio de Tesorerías analizar caso a caso** la real situación de los deudores y pactar con ellos -dentro de ciertas limitaciones- las condiciones pago más adecuadas.

Por otra parte, la suscripción de un convenio de dicha clase acarrea la inmediata suspensión de todos los pronunciamientos de apremio, especialmente los remates, y dicha suspensión se mantiene vigente en tanto el convenio se cumpla.

En virtud de lo anterior, pareciera inconveniente que el Ejecutivo propicie una condonación absoluta de las deudas ex-CORA, después de haber dado su patrocinio al sistema de convenios comentado, ya que eventualmente éstas serán sometidas al tratamiento especial señalado.